

REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

AÑO XXX — OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1962 — Nº 122

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

CONSEJO CONSULTIVO:

MANUEL SANHUEZA CRUZ

HUMBERTO TORRES RAMIREZ

JUAN BIANCHI BIANCHI

QUINTILIANO MONSALVE JARA

MARIO CERDA MEDINA

LUIS HERRERA REYES

ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA — CONCEPCION (CHILE)

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

**CECILIA Y GLORIA MORAGA BLUMETTI
CON JOSE RENE MORAGA GUAJARDO.**

ALIMENTOS (Juicio de Menores)

Apelación de la sentencia definitiva.

ALIMENTOS — OBLIGACION ALIMENTICIA — PADRES — JUICIOS DE ALIMENTOS DE MENORES — JUZGADOS DE LETRAS DE MENORES — PACTOS SOBRE ALIMENTOS — DISPOSICIONES LEGALES DE ORDEN PUBLICO — COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES — COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LETRAS DE MENORES — INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL — LEY 4.447 SOBRE PROTECCION DE MENORES — ALIMENTOS FUTUROS — ALIMENTOS DEVENGADOS — PACTO EXTRAJUDICIAL SOBRE ALIMENTOS FUTUROS — DEMANDA — ALIMENTOS ATRASADOS — ASIGNACION FAMILIAR — IRRENUNCIABILIDAD DEL DERECHO A PERCIBIR ASIGNACION FAMILIAR — PERCEPCION MATERIAL DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES — PERCEPCION DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES POR EL PADRE — AUTORIZACION TACITA DE LA MADRE PARA QUE EL PADRE PERCIBA LAS ASIGNACIONES FAMILIARES DE SUS HIJOS MENORES — INCOBRABILIDAD POR LA MADRE DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES DE SUS HIJOS MENORES PERCIBIDAS POR EL PADRE CON SU AUTORIZACION TACITA.

DOCTRINA.—Si bien es cierto que el artículo 160 del Código Civil prescribe que ambos padres deben proveer a las necesidades de la familia, en proporción a sus facultades, no lo es menos que para tal obligación rija respecto de la madre, es menester que se acredite que esta última posee entradas o recursos económicos suficientes para ello.

El solo hecho de que el artículo 331 del Código Civil establezca que los alimentos se deben desde la primera demanda, no es suficiente para alterar reglas de orden público como son las que señalan la competencia de los Tribunales, y, por consiguiente, no tiene fundamento la excepción deducida por el demandado, sobre incompetencia del Juzgado de Menores para conocer de una demanda de alimentos en favor de sus hijos menores, en razón de haberse celebrado, por las partes litigantes, un pacto extrajudicial referente a alimentos para esos hijos con anterioridad a la interposición de la demanda de autos.

En efecto, la Ley N° 4.447, sobre Protección de Menores, modificada por la Ley N° 14.550, en el artículo nuevo que agrega a continuación del 12, determina, en el N° 2, la competencia de los Jueces de Letras de Menores para conocer de las demandas de alimentos de menores, sin hacer distinción entre alimentos futuros y devengados, siendo de agregar, además, que el mencionado artículo 331 del Código Civil se refiere a los alimentos que deben ser objeto de una regula-

ción judicial y no a los que han sido regulados por la simple voluntad de las partes, como ocurre con respecto al pacto alimenticio celebrado en la especie.

A mayor abundamiento, el artículo 336 del mismo cuerpo de leyes ya citado señala que los alimentos atrasados pueden, entre otras cosas, demandarse, de donde se infiere claramente que, siendo atrasados, no pueden deberse sólo desde la primera demanda y, aún más, si dichos alimentos son relativos a menores, por la especialidad de la ley que creó los Juzgados de Menores, son estos tribunales, indudablemente, los que deben conocer de ellos.

Aun cuando el derecho a percibir las asignaciones familiares no puede renunciarse, en cambio sí puede hacerse la renuncia a su percepción material, y si consta que la demandante no hizo uso del derecho a percibir personalmente las asignaciones familiares de sus hijos menores, que le confiere la Ley N° 11.051, debe estimarse que tácitamente aceptó que ellas fueran obtenidas por el demandado, no correspondiéndole, entonces, cobrarlas con posterioridad.

ALIMENTOS DE MENORES

125

Sentencia de Primera Instancia

Santiago, siete de Mayo de mil novecientos sesenta y dos.

Vistos y teniendo presente:

A fojas 1 y siguientes, doña Haydée Blumetti Troviano, sin profesión, de este domicilio, calle Mac - Iver Nº 431, entabla demanda de alimentos congruos para sus hijas legítimas Cecilia y Gloria Moraga Blumetti, solicitando se condene a pagarlos al padre legítimo de las menores, don José René Moraga Guajardo.

La demandante solicita además que, aparte de los alimentos congruos futuros, se condene al demandado a pagar alimentos atrasados debidos como consecuencia de un pacto sobre alimentos celebrado con el demandado y junto con las asignaciones familiares; pide, además, se le condene al pago de las costas de la causa, notificándose legalmente la demanda el 7 de Julio de 1961.

La demandante fija su demanda de alimentos futuros en ciento ochenta escudos mensuales (Eº 180) y los devengados en un mil seiscientos sesenta escudos (Eº 1.660).

A fojas 6, el demandado René Moraga Guajardo, médico, de este domicilio, calle Guayaquil Nº 21, contestando la demanda, pide se rechace con costas, expresando que, en todo caso, las necesidades alimenticias de sus hijas legítimas ya individualizadas, no son superiores a cincuenta escudos mensuales; que las asignaciones familiares atrasadas corresponde a él invertirlas, como ha ocurrido; que en cuanto a las asignaciones futuras, no tiene inconveniente en que la madre las perciba; que desconoce la obligación alimenticia que sostiene la actora haber existido, como consecuencia de un pacto anterior, siendo en todo caso la demanda improcedente en este aspecto por estimar que los alimentos se deben desde la primera demanda y que en todo caso, en la hipótesis de existir tal pacto, el Tribunal sería incompetente para conocer de esta parte de la acción.

A fojas 8 tuvo lugar el comparendo de estilo, ratificando las partes las peticiones contenidas en la demanda y su contestación.

A fojas 10, el Tribunal fijó una pensión provisoria de cuarenta escudos mensuales, más las asignaciones familiares, ne-

gando el derecho de la actora para cobrar alimentos devengados atrasados y recibió la causa a prueba, fijándose como puntos: a) facultades económicas de las partes y sus condiciones domésticas; b) necesidades alimenticias de los menores.

Que la demandante se opuso a lo resuelto por el Tribunal y se citó nuevamente a comparando.

A fojas 15, en el estado de verificarse este último comparando, fue remitida la causa al Cuarto Juzgado de Letras de Menores, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 14.550, y a fojas 16 este Tribunal acepta la competencia.

A fojas 21 vuelta, el sentenciador consideró que la tramitación adolecía de vicios que debían subsanarse a fin de evitar la nulidad del procedimiento, lo que resolvió en ejercicio de las facultades que otorga el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, reponiendo la causa al estado de resolver al tenor de las peticiones de la demanda y su contestación. Además se fijaron alimentos provisorios con cargo al demandado, en la suma de cuarenta escudos mensuales, sin perjuicio de las asignaciones

familiares y se recibió la causa a prueba, fijándose como puntos sustanciales controvertidos: a) facultades económicas de las partes y sus condiciones domésticas; b) necesidades alimenticias de los menores; y c) existencia de algún pacto entre las partes respecto al pago de alimentos anteriores a la fecha de presentación de la demanda, rindiéndose la testimonial de fojas 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43 y la documental que rola a fojas 1, 2, 3, 27, 28, 29, 44, 45, 46, 56 y 65.

A fojas 69 y 73 rolan informes de los emolumentos percibidos por el demandado.

A fojas 77 se agregó informe social evacuado por la Asistente del Tribunal.

A fojas 86 se decretó, con el carácter de medida para mejor resolver, la agregación a los autos de copia de la sentencia de nulidad del matrimonio celebrado entre las partes, diligencia que se cumplió a fojas 87 y siguientes.

Se trajeron los autos para fallar.

Considerando:

1°—Que la parte demandante ha acompañado a los autos, los siguientes documentos: docu-

ALIMENTOS DE MENORES

127

mentos privados ordenados guardar en Secretaría a fojas 9 vuelta; instrumento público de fojas 56, los que fueron objetados por la contraria a fojas 9 y 61.

Que, por su parte, el demandado acompañó a los autos los documentos de fojas 27, 28, 29, 44, 45, 65 y 66, los que fueron objetados a fojas 35, 53 y 56.

Que el Tribunal da lugar a las objeciones formuladas, sin perjuicio del valor probatorio que les confiere apreciándolos en conciencia, de conformidad a lo señalado por el artículo 2º agregado a continuación del 27, por la Ley 14.550, a la 4.447;

2º—Que doña Haydée Blumetti Troviano, deduce acción de alimentos congruos en contra de René Moraga Guajardo y en favor de sus hijas Cecilia y Gloria, por la suma de ciento ochenta escudos mensuales;

3º—Que, con el mérito de los documentos de fojas 1, 2, 3 y 87 y siguientes, se ha demostrado en autos que Cecilia y Gloria Moraga Blumetti son hijas legítimas del demandado, quien tiene, entonces, la obligación de proporcionarles alimentos congruos en los términos concebidos por el artículo 321 del

Código Civil en relación con el 324 del mismo cuerpo de leyes;

4º—Que, con el mérito del informe de emolumentos de fojas 73, se ha acreditado que el demandado percibe una renta líquida mensual de E° 271,70, por sus labores desempeñadas como médico funcionario del Hospital Ramón Barros Luco;

5º—Que, con el mérito de los documentos de fojas 28 y 29, se ha demostrado asimismo que el demandado ejerce su profesión de médico en forma particular, actividad en la cual el Tribunal considera que no puede obtener entradas inferiores a las mencionadas en el considerando anterior;

6º—Que demuestra aún más esta aseveración, lo expresado en el informe social de fojas 77, el que señala, de acuerdo con lo expuesto por el propio demandado, que sus entradas serían inferiores a sus gastos, lo que es contrario a la lógica y sentido común, si se considera que se trata de un profesional. Refuerza esta opinión, la deposición del testigo Horacio Olate, quien declara a fojas 39;

7º—Que si bien, el artículo 160 del Código Civil, prescribe

que ambos padres deben proveer a las necesidades de la familia, en proporción a sus facultades, no se ha demostrado, a juicio del Tribunal, que la demandante posea entradas suficientes para ello, ya que, de conformidad a lo expresado en el documento agregado a fojas 56, los derechos hereditarios que se le imputan, únicos bienes con que se le hace aparecer, se encuentran cedidos legalmente, con anterioridad a la presentación de la demanda. Corrobora lo así expresado, la diligencia de absolución de posiciones de fojas 51 y las declaraciones de los testigos Mercedes Alicia Rodríguez Valdivia y Elsa Wolter Guerra, a fojas 40 vuelta y 42 respectivamente;

8º.—Que atendido lo expuesto en el informe social de fojas 77, las necesidades de las menores deben estimarse en la suma de doscientos diez escudos mensuales;

9º.—Que estos antecedentes, apreciados en conciencia por el Tribunal, reúnen los caracteres de gravedad y precisión suficientes, para dar por establecido que el demandado tiene medios económicos adecuados para proveer a las necesi-

dades de las menores y estos medios son superiores a los expuestos por él en autos;

10.—Que se ha sometido a la resolución del Tribunal, la regulación de obligaciones derivadas de un pacto alimenticio extrajudicial celebrado entre las partes;

11.—Que es necesario determinar, a este respecto, tres órdenes de cosas: a) la existencia de dicho pacto; b) la competencia del Tribunal, en caso de existir, para conocer del mismo; y c) el incumplimiento de las obligaciones que de él derivan.

Que en lo que respecta al punto a), es decir, al establecimiento de la existencia del pacto extrajudicial aludido, se han producido en la causa, los siguientes antecedentes que llevan a dar por probada su existencia: 1) demanda de fojas 1 y siguientes; 2) documentos agregados a fojas 8 y ordenados guardar en Secretaría a fojas 9 vuelta con fecha 17 de Julio de 1961; 3) deposición de Rubén Célis Rodríguez, a fojas 31 y 32; antecedentes todos que, apreciados por el Tribunal en conciencia y al tenor del artículo 1.712 del Código Civil y 426, inciso 2º, del Código de Procedi-

ALIMENTOS DE MENORES

129

miento Civil, lo llevan al convencimiento de que realmente existió entre las partes, un pacto extrajudicial referente a alimentos para los hijos menores.

En lo que se relaciona con el punto b), esto es, la competencia del Tribunal, y establecida ya la existencia del pacto con el mérito de lo indicado en la letra a), este Tribunal, por las razones que pasa a exponer, se considera competente para conocer del mismo. En efecto, el pacto así establecido, es lícito, no solemne, ya que la ley no exige que lo sea, relativo a menores, referente a pensiones alimenticias y la Ley 4.447, modificada por la Ley 14.550, en su artículo nuevo que agrega a continuación del 12, determina, en el Nº 2, la competencia de los Jueces de Letras de Menores para conocer de las demandas de alimentos de menores, no distinguiendo entre alimentos futuros y devengados, no procediendo, por tanto, que el Tribunal entre a discriminar al respecto.

Que la parte demandada ha alegado la incompetencia del Tribunal basándose en la disposición del artículo 331 del Código Civil, o sea, que los ali-

mentos se deben desde la primera demanda, razón que, a juicio del Tribunal, no le priva para conocer de un pacto sobre alimentos, celebrado con anterioridad a la presentación de la demanda, toda vez que dicho precepto legal se está refiriendo a los alimentos que deben ser objeto de una regulación judicial y no a los que lo han sido por la simple voluntad de las partes; a mayor abundamiento, el artículo 336 del Código Civil señala que los alimentos atrasados pueden, entre otras cosas, demandarse, de donde se infiere claramente que, siendo atrasados, no pueden deberse sólo desde la primera demanda y si éstos son relativos a menores, por la especialidad de la ley que creó estos tribunales, deben conocer de ellos, de conformidad a lo establecido en la Ley 4.447, modificada por la Ley 14.550 en su artículo nuevo Nº 2, agregado a continuación del 12. Es decir, que este Tribunal estima que el solo hecho que la ley señale que los alimentos se deben desde la primera demanda, no es suficiente para alterar reglas de orden público como son las que señalan la competencia de los Tribunales. Se refuerza aún más es-

ta idea, si se tiene en consideración que el pacto celebrado sólo reconoce la obligación legal alimenticia del padre para con sus hijos menores y no es el producto de la simple voluntad de los contratantes.

Que establecida, así, la existencia de obligaciones que aunque tienen su origen en la ley, depende la regulación de su monto, o del acuerdo particular de las partes o de la regulación judicial, procede pronunciarse sobre el cumplimiento que las partes han dado a las mismas; es decir, en lo que se relaciona con el punto c).

Que a fojas 1 y siguientes, se demandó el incumplimiento del pacto alimenticio celebrado, manifestando la actora que el demandado sólo dio cumplimiento parcial al pago de las pensiones convenidas, limitándose a cumplirlas hasta el mes de Enero de 1960, inclusive.

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1.698 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o éstas; y en el caso preciso de autos, habiendo el demandado negado la existencia del pacto, título de la obliga-

ción legal de la que se reclama su incumplimiento, corresponde al actor demostrarlo.

Que con el mérito de los documentos acompañados a fojas 8 y ordenados guardar en Secretaría a fojas 9 vuelta; de la declaración del testigo Rubén Célis Rodríguez a fojas 31 y siguientes; de lo expuesto por la demandante a fojas 4 y en el informe social de fojas 7 y siguientes del cuaderno de tui- ción sobre los mismos menores, tenido a la vista, se ha demostrado al Tribunal que René Moraga Guajardo dio cumplimiento parcial al pacto celebrado y este cumplimiento sólo alcanzó al mes de Enero de 1960.

Que si bien, a juicio del Tribunal, se demostró el cumplimiento parcial del pacto, de los mismos antecedentes enumerados anteriormente, se desprende que el monto de la pensión que cumplió el demandado alcanzó a la suma de sesenta escudos mensuales, debiendo, en consecuencia, considerarse sólo esta mesada para la fijación del total adeudado, por ser la única acreditada en autos y no haberse probado el convenio de las partes en cuanto regulaba los alimentos en cien escudos mensuales.

ALIMENTOS DE MENORES

131

Que refuerza esta opinión, el hecho de que los documentos que demuestran que el demandado dio cumplimiento a la pensión de sesenta escudos mensuales, están reconocidos en cuanto a su otorgamiento a fojas 9 y si bien han sido objetados en cuanto a su contenido, alegando que ellos se refieren a la mantención del hogar común, no merece atención esta razón ya que claramente se desprende de autos que la separación material de los cónyuges ocurrió en Agosto de 1959 y no en Enero de 1960, como lo pretende el demandado;

12.—Que también se cobran las asignaciones familiares de las menores, las que habrían sido percibidas por su padre René Moraga Guajardo. A este respecto, el Tribunal estima que si bien el derecho a percibir las no puede renunciarse, en cambio sí puede hacerse su percepción material y si la actora no hizo uso del derecho a percibir las personalmente, que le confiere la Ley 11.051, debe estimarse que tácitamente aceptó fueran obtenidas por su ex-cónyuge, no correspondiéndole, entonces, cobrarlas con posterioridad y asistiéndole

le a aquél la materialidad de su inversión.

Por estas consideraciones y, visto además, lo dispuesto por los artículos 1º agregado después del 12, de la Ley 4.447, 2º agregado a continuación del 27 y en la misma Ley 4.447; artículos 1º, 3º y 8º de la Ley 5.750; 2º de la 14.550; y artículos 160, 321, 322, 324, 326, 329, 330, 331, 332, 1.543, 1.545, 1.698 y 1.712 del Código Civil y 426 del Código de Procedimiento Civil, se declara que: Se acoge la demanda de fojas 1 y siguientes en cuanto se resuelve:

1º—Que don René Moraga Guajardo está obligado a pagar, en calidad de alimentos congruos para sus hijas legítimas Cecilia y Gloria Moraga Blumetti, la suma de ciento treinta escudos mensuales, sin perjuicio de las asignaciones familiares correspondientes, en caso que se devenguen;

2º—Que ha lugar también a la demanda, en cuanto se solicita que el demandado René Moraga Guajardo, deberá pagar a la demandante Haydée Blumetti Troviano y en favor de las mismas menores, la suma de un mil veinte escudos (Eº 1.020), por concepto de

pensiones alimenticias devengadas, en virtud del pacto alimenticio celebrado entre las partes y a razón de sesenta escudos mensuales, entre Febrero de 1960 y Junio de 1961, ambas fechas inclusives;

3º—Que no ha lugar al cobro de las asignaciones familiares devengadas en la misma época; y

4º—Que no ha lugar a la condenación en costas, por haber tenido ambas partes fundamentos plausibles para litigar, debiendo cada una cargar con las suyas.

Anótese y regístrese.

Hernán Cereceda B.

Dictado por el señor Juez titular del Cuarto Juzgado de Letras de Menores, don Hernán Cereceda Bravo. — N. N., Secretario.

Sentencia de Segunda Instancia

Santiago, dieciséis de Noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Vistos:

Reproduciendo la sentencia en alzada, de siete de Mayo último, escrita a fojas 96, se la confirma, con declaración, en cuanto a su decisión primera, de que se eleva a ciento veinte escudos la pensión alimenticia mensual que el demandado debe pagar para sus hijas Cecilia y Gloria Moraga Blumetti, sin costas de la instancia, por no haberse vencido las partes completamente.

Anótese y devuélvase.

Publíquese el fallo de primera instancia, conjuntamente con esta resolución.

Reemplácese el papel.

O. Erbetta V. — Armando Alvarez G. — Benjamín Rivera.

Dictada por los señores Ministro en propiedad de la Ilustrísima Corte, don Osvaldo Erbetta Vaccaro y Abogados integrantes, don Armando Alvarez González y don Benjamín Rivera. — Santiago Aguirre Amaya, Secretario.